CCE-DES-FM-17

**CAPACIDAD RESIDUAL – Capacidad de organización – Ley 1150 de 2007 – Decreto 1082 de 2015**

[…] el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, estableció que la capacidad residual del proponente se debe calcular mediante la evaluación de los siguientes factores: Experiencia –E–, Capacidad Financiera –CF–, Capacidad Técnica –CT– y Capacidad de Organización –CO–.

**ESTADO DE RESULTADOS – Documentos tipo – Infraestructura de transporte versión 3 – Acreditación**

De acuerdo con lo establecido en los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte – Versión 3 y selección abreviada de menor cuantía – Versión 2 en el numeral 3.10.2, literal A, del documento base, para la acreditación del estado de resultados de los proponentes que cuentan con RUP solo se requiere aportar el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente –externo–, si están obligados a tenerlos, y la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes –externos–, quienes suscribieron dichos documentos de conformidad con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. Lo anterior sin que el documento tipo exija el dictamen del estado de resultados señalado en el artículo 38 ibidem. Esta forma de acreditación de la capacidad de organización es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran inscritas en el RUP. Al respecto, la redacción del documento base dispone que «[…] para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos […]». Por esta razón, lo dispuesto en el pliego es exigible a todos los proponentes inscritos en el RUP, sin distinguir la naturaleza de la actividad desarrollada. En este sentido, el documento base es congruente con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el cual prescribe que, tratándose de proponentes obligados a tener RUP, las entidades estatales deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.



Bogotá D.C., 22 Noviembre 2021

Señor

**Otto Gabriel Forero**

Bogotá D.C.

**Concepto C – 648 de 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Temas:** | CAPACIDAD RESIDUAL – Capacidad de Organización – Ley 1150 de 2007 – Decreto 1082 de 2015 / ESTADO DE RESULTADOS – Documentos tipo – Infraestructura de transporte – V3- Acreditación / |
| **Radicación:** | Respuesta a consulta P20211006009201 |

Respetado señor Forero:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 11, numeral 8º, y 3º, numeral 5º, del Decreto Ley 4170 de 2011, la Agencia Nacional de Contratación Pública − Colombia Compra Eficiente responde su consulta con fecha de 6 de octubre de 2021.

1. **Problema planteado**

Respecto a la presentación de los estados financieros para acreditar la capacidad organizacional relacionada con la capacidad residual en los documentos tipo para licitación de obra pública – Versión 3 y de selección abreviada de menor cuantía – Versión 2, usted solicita:

«[…] aclarar si de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los proponentes aparte de presentar el estado de resultados integral del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, deben adjuntar la certificación de que trata el artículo 37?

En el mismo sentido, las personas naturales en el ejercicio de su profesión liberal (ingenieros, arquitectos, etc.) que participan en los procesos de selección deben aportar estados de resultados certificados?».

1. **Consideraciones**

Para responder su consulta, esta dependencia analizará los siguientes aspectos: i) información financiera requerida para calcular la capacidad de organización para efectos de la capacidad residual, ii) acreditación del factor Capacidad de Organización (CO) en las versiones 1, 2 y 3 de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte, iii) estado de resultados en los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte – Versión 3 y iv) regla de inalterabilidad de los documentos tipo.

La Agencia Nacional de Contratación Pública − Colombia Compra Eficiente se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre los requisitos para acreditar la capacidad residual en los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte, en los conceptos C-389 del 21 de julio de 2020, C-393 del 21 de julio de 2020, C-461 del 13 de julio de 2020, C-742 del 16 de diciembre de 2020, C-067 del 15 de marzo de 2021, C-170 del 20 de abril de 2021, C-467 de 7 de septiembre de 2021, C-521 del 24 de septiembre de 2021, entre otros. De igual manera, ha analizado la inalterabilidad de los documentos tipo en los conceptos C-179 del 28 de abril de 2021, C-287 del 18 de junio de 2021, C-428 del 20 de agosto de 2021, entre otros. Las tesis desarrolladas en dichos conceptos se reiteran y se complementan en lo pertinente.

**2.1. Capacidad residual e información financiera requerida para calcular la capacidad de organización**

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad residual es la aptitud de los oferentes para cumplir de manera oportuna y a cabalidad el objeto de un contrato de obra, sin que los demás compromisos contractuales que han adquirido afecten su habilidad para cumplir el objeto del contrato que está en proceso de selección. Por su parte, el Consejo de Estado ha definido la capacidad residual como «la diferencia que existe entre el potencial de contratación que se tiene y los compromisos que haya adquirido y que se encuentren en ejecución, para la fecha de presentación de la oferta»[[1]](#footnote-1).

En atención a lo anterior, la capacidad residual se refiere a la suficiencia que tiene el proponente para asumir nuevas obligaciones que se derivan del contrato objeto del proceso de contratación, en relación con las obligaciones que ya adquirió frente a otros contratos. De esta manera, el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 estableció como condición «para poder participar en los procesos de selección de los contratos de obra, la capacidad residual del proponente o K de contratación». Además, determinó que esta debe ser igual o superior a la establecida en los pliegos de condiciones, en los siguientes términos:

Parágrafo 1°. Para poder participar en los procesos de selección de los contratos de obra y demás que señale el reglamento, la capacidad residual del proponente o K de contratación deberá ser igual o superior al que la entidad haya establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

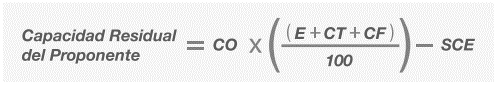
Para establecer la capacidad residual del proponente o K de contratación, se deberán considerar todos los contratos que tenga en ejecución el proponente al momento de presentar la oferta. El desarrollo y ejecución del contrato podrá dar lugar a que los valores que sean cancelados al contratista se consideren para establecer el real K de contratación, en cada oportunidad. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Por su parte, el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, estableció que la capacidad residual del proponente se debe calcular mediante la evaluación de los siguientes factores: Experiencia –E–, Capacidad Financiera –CF–, Capacidad Técnica –CT– y Capacidad de Organización –CO–. En igual sentido, el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 dispone lo siguiente:

El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos: […]

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología que defina Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución (SCE).

De conformidad con lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública ‒‒ Colombia Compra Eficiente expidió la guía para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los procesos de contratación de obra pública. En este documento se establece que la capacidad residual del proponente se calcula según la siguiente fórmula:



Como se observa, la Capacidad de Organización –CO– corresponde a uno de los factores para calcular la capacidad residual del proponente en los procesos de obra pública. Para su verificación se examinan los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Años de información financiera** | **Capacidad de organización** |
| Cinco (5) años o más | Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años |
| Entre uno (1) y cinco (5) años | Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente |
| Menos de un (1) año | USD 125.000 |

En armonía con lo anterior, el análisis consiste en revisar el mayor ingreso operacional del proponente que reflejará la capacidad real de organización del mismo. En palabras de la Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI, «En la medida que una empresa constructora haya sido capaz de ejecutar contratos de obra de mayor cuantía y mayor cantidad, significa que esa empresa ha ido superando niveles de crecimiento y por lo tanto ha obtenido una mayor Capacidad de Organización (Co). Esta capacidad del proponente […] debe determinarse con base en los ingresos brutos operacionales relacionados exclusivamente con la actividad de la construcción […]»[[2]](#footnote-2).

De esta manera, la capacidad de organización está en función de los ingresos operacionales del proponente. De ahí que tanto el Decreto 1082 de 2015 como el documento tipo soliciten el estado de resultados, puesto que mediante este documento se relacionan los ingresos, costos y gastos en los que incurrió el proponente, de tal forma que se puedan evidenciar los ingresos operacionales que ha obtenido en un determinado período.

Así las cosas, analizado el alcance del requisito habilitante de capacidad residual en los procesos de contratación y el de la capacidad de organización como uno de sus factores, a continuación se explicará la forma en que se reguló este requisito en los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte en su Versión 1, Versión 2 y Versión 3, ya que el proceso de desarrollo de este contenido de los documentos tipo es útil para entender el alcance de lo regulado en la última versión. Con fundamento en lo anterior, se analizarán los principales cambios referidos a la acreditación de la capacidad de organización en la nueva versión de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte, centrando el análisis específicamente en el documento base. En todo caso, se aclara que la regulación de este aspecto en el documento tipo de licitación – Versión 3 se ha mantenido inalterado, pese a las variaciones en el pliego de condiciones.

**2.2. Acreditación del factor Capacidad de Organización –CO– en las versiones 1, 2 y 3 de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte y versión 2 de selección abreviada de menor cuantía**

Es pertinente resaltar que, en materia de infraestructura de transporte en la modalidad de licitación pública, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, hasta el momento ha adoptado y actualizado los siguientes documentos tipo que son obligatorios para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública:

i) Documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte –Versión 1–, implementados mediante la Resolución No. 1798 de 2019, obligatorios para los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya publicado desde el 1 de abril de 2019.

ii) Documentos tipo para procesos de menor cuantía de infraestructura de transporte– versión 1–, obligatorios para procesos cuyo aviso de convocatoria se haya publicado desde el 17 de febrero de 2020.

iii) Documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte –Versión 2–, actualizados mediante la Resolución No. 045 de 2020[[3]](#footnote-3), obligatorios para los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya publicado desde el 10 de marzo de 2020.

iv) Documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte –Versión 3– y para procesos de menor cuantía de infraestructura de transporte –versión 2–, actualizados mediante las Resoluciones No. 240 y 241 de 2020, obligatorios para los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya publicado desde el 1 de enero de 2021. A su vez, estos documentos tipo fueron modificados mediante las Resoluciones No. 161 y 304 de 2021 en aspectos relacionados con los criterios de desempate y la aplicación de la regla de origen. No obstante, como se indicó, con estas modificaciones no varió lo relacionado con la capacidad de organización como componente de la capacidad residual.

Ahora bien, respecto del requisito de la capacidad residual o K de contratación se realizaron ajustes en cuanto a la verificación de la capacidad de organización en cada una de las versiones antes descritas. En estos documentos, la Agencia precisa los requisitos en relación con los proponentes obligados a tener RUP, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Siguiendo esta misma línea, a continuación se explicará la forma en que se reguló este requisito en los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura – Versión 1, Versión 2 y Versión 3 – y selección abreviada de menor cuantía.

Así, en los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte *Versión 1*, el Documento Base establecía que para acreditar la capacidad residual el proponente debía presentar los siguientes documentos:

i) Estado de resultados integral –estado de resultados o pérdida o ganancias–, del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente –externo–, si está obligados a tenerlos.

ii) Información financiera auditada y aprobada por el máximo órgano social que pretende acreditar el proponente.

iii) Certificación de los estados financieros de que trata el artículo 37 de la ley 222 de 1995, en la cual el representante legal y contador público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros, declaren que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.

iv) Dictamen del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente cuando el proponente esté obligado a ello, del año o en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, en los términos descritos en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

v) Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos anteriores.

De otro lado, en los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte *Versión 2* se ajustaron los requisitos limitándolos únicamente a los documentos señalados en los numerales i) y v) antes mencionados. De esta manera, se establece que los proponentes obligados a tener RUP deben presentar los siguientes documentos: i) el estado de resultados integral –estado de resultados o pérdida o ganancias–, del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco –5– años, debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal, y ii) copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes –externos–, quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

De la lectura de estos últimos requisitos, se advierte que para los proponentes obligados a tener RUP no sería necesario presentar los siguientes documentos: i) la información financiera auditada y aprobada por el máximo órgano social que pretende acreditar el proponente, ii) la certificación de los estados financieros de que trata el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en la cual el representante legal y contador público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros, declaren que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros. Y iii) el dictamen del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente, cuando el proponente esté obligado a ello, del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, en los términos descritos en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

Las razones para eliminar estos documentos se fundamentaron en lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, que indica que para acreditar la capacidad residual solo se requiere presentar: «[…] 3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. *Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años*»[[4]](#footnote-4).

En este sentido, se consideró que el Decreto reglamentario de forma expresa indica los documentos necesarios para acreditar la capacidad residual, sin prever la exigencia de presentar la información financiera auditada y aprobada por el máximo órgano social que pretende acreditar el proponente.

Posteriormente, en la *Versión 3* de los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte, el *Documento Base* dispone idénticamente en el numeral 3.11.2., literal A, que para acreditar el factor de capacidad de organización (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995.

ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

Como se advierte, la *versión 3* de los documentos tipo mantiene el enfoque regulativo establecido en la *Versión 2*. En efecto, continuando con el análisis anterior, el numeral 3.11.2., literal A del Documento Base de los Documentos Tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte – Versión 3, al referirse al estado de resultados dentro de la capacidad de organización para determinar la capacidad residual hace una remisión al artículo 37 de la Ley 222 de 1995. De igual forma, el documento base de los documentos tipo para la selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte *versión* 2 reprodujo la misma estipulación sobre la acreditación de la capacidad de organización de los proponentes inscritos en el RUP, referida para los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte versión 3.

El artículo en mención señala que «El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros». Además, vale reiterar que, entre otras cosas, a diferencia de la *versión 1,* no se hace referencia a la necesidad de que dicho estado de resultados se aporte de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

De esta manera, es importante señalar que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, normativa que reglamenta la profesión de contador público, la firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales. De igual forma, tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registrados en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance[[5]](#footnote-5).

En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional, en la sentencia C-861 de 2008, reconoce que la profesión de contador público tiene un importante riesgo social en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares y, por tanto, es necesario que tengan una mayor responsabilidad frente a los documentos que suscriben. Así lo determinó en los siguientes términos:

A los Contadores Públicos por el hecho de dar fe pública se les impone un mayor nivel de responsabilidad, pues con el ejercicio de su actividad pueden ocasionar un riesgo social al poner en peligro intereses tan importantes como el orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí, de manera que se otorga un mayor ámbito de libertad a quienes no causan tal riesgo, evitando con ello una innecesaria y excesiva regulación de la profesión arte u oficio desarrollada por éstos últimos y obedeciendo así a criterios equitativos de equivalencia entre el interés protegido y las limitaciones fijadas. La decisión que adoptó el legislador de conferir una función fedante a los Contadores Públicos, obedece a una finalidad de interés general[[6]](#footnote-6).

De este modo, en virtud de la Ley 43 de 1990, todos los actos firmados por los contadores públicos se presumen acordes con los requisitos legales. Sin dejar de lado, que los balances generales también se presumen que se han tomado fielmente de los libros y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance. Así las cosas, todos los documentos suscritos por el contador dan fe pública que el documento está acorde con la normativa y, por tanto, para que sea válido este documento no se requerirán requisitos adicionales, como la aprobación del máximo órgano social o el dictamen del revisor fiscal o del contador público.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, y teniendo en cuenta el contenido de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte – versión3y procesos de selección abreviada de menor cuantía – versión 2, para acreditar la capacidad organizacional de los proponentes que cuentan con RUP solo se requiere aportar el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo mayor ingreso operacional en los últimos 5 años debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente –externo–, si están obligados a tenerlos, y la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes –externos–, quienes suscribieron dichos documentos, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. Lo anterior, sin que el Documento Tipo exija el dictamen del estado de resultados señalado en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, por lo que el requisito se acredita en los términos establecidos en dichos documentos tipo.

**2.4. Regla de inalterabilidad de los documentos tipo**

Es importante tener en cuenta la inalterabilidad de los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Esta se encuentra consagrada en los artículos 2.2.1.2.6.1.4, 2.2.1.2.6.2.3 y 2.2.1.2.6.3.4 del Decreto 1082 de 2015, consiste en que las entidades estatales no pueden incluir o modificar en los documentos del proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación distintos a los señalados en los documentos tipo. En consecuencia, las condiciones establecidas en los documentos que adopte el Gobierno Nacional, en ejercicio del mandato establecido en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, son de obligatorio cumplimiento para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten procesos que deban regirse por su contenido, y no pueden variarse los requisitos fijados en ellos.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que en relación con los documentos tipo expedidos o actualizados luego de la vigencia de la Ley 2022 de 2020[[7]](#footnote-7), el fundamento de la inalterabilidad de su contenido se deriva de lo establecido en dicha ley y particularmente lo prescrito en cada una de las resoluciones que adoptan los documentos tipo. En tal sentido, en relación con los documentos tipo de obra de infraestructura de transporte en la modalidad de licitación –Versión 3– y selección abreviada de menor cuantía –Versión 2–, el artículo 3 de las Resoluciones No. 240 y 241 de 2020 dispone la inalterabilidad de los documentos tipo en los siguientes términos: «Las entidades estatales contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los documentos del proceso de selección las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación que han sido definidos y señalados en los documentos tipo».

Así las cosas, el documento base solo exigen aportar el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo mayor ingreso operacional en los últimos 5 años debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente –externo–, si están obligados a tenerlos, y la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes –externos–, quienes suscribieron dichos documentos, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. Lo anterior sin que el documento tipo exija el dictamen del estado de resultados señalado en el artículo 38 *ibidem*.

Esta forma de acreditación de la capacidad de organización es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran inscritas en el RUP. Al respecto, la redacción del documento base dispone que «[…] para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos […]». Por esta razón, lo dispuesto en el pliego es exigible a todos los proponentes inscritos en el RUP, sin distinguir la naturaleza de la actividad desarrollada. En este sentido el documento base es congruente con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el cual prescribe que, tratándose de proponentes obligados a tener RUP, las entidades estatales deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.

1. **Respuesta**

Respecto a la presentación de los estados financieros para acreditar la capacidad organizacional relacionada con la capacidad residual en los documentos tipo para licitación de obra pública– Versión 3 y de selección abreviada de menor cuantía – versión 2, usted solicita: «[…] aclarar si de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los proponentes aparte de presentar el estado de resultados integral del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, deben adjuntar la certificación de que trata el artículo 37?

En el mismo sentido, las personas naturales en el ejercicio de su profesión liberal (ingenieros, arquitectos, etc.) que participan en los procesos de selección deben aportar estados de resultados certificados?

De acuerdo con lo establecido en los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte – Versión 3 y selección abreviada de menor cuantía – Versión 2 en el numeral 3.10.2, literal A, del documento base, para la acreditación del estado de resultados de los proponentes que cuentan con RUP solo se requiere aportar el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente –externo–, si están obligados a tenerlos, y la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes –externos–, quienes suscribieron dichos documentos de conformidad con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. Lo anterior sin que el documento tipo exija el dictamen del estado de resultados señalado en el artículo 38 *ibidem*.

Esta forma de acreditación de la capacidad de organización es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran inscritas en el RUP. Al respecto, la redacción del documento base dispone que «[…] para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos […]». Por esta razón, lo dispuesto en el pliego es exigible a todos los proponentes inscritos en el RUP, sin distinguir la naturaleza de la actividad desarrollada. En este sentido, el documento base es congruente con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el cual prescribe que, tratándose de proponentes obligados a tener RUP, las entidades estatales deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.

Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Atentamente,

Texto

Descripción generada automáticamente

|  |  |
| --- | --- |
| Elaboró: | Nina María Padrón Ballestas  Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual |
| Revisó: | Juan David Montoya Penagos  Gestor T1-15 de la Subdirección de Gestión Contractual |
| Aprobó: | Jorge Augusto Tirado Navarro  Subdirector de Gestión Contractual ANCP – CCE |

1. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 26 de junio de 2003. Rad. 13.354. C.P: María Elena Giraldo Gómez. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sociedad Colombiana de Ingenieros. Concepto técnico. Capacidad de Contratación Para Constructores. Febrero 2014. [↑](#footnote-ref-2)
3. Esta resolución actualizó los Documentos Tipo - Versión 1 mediante los Documentos Tipo - Versión 2 y derogó la Resolución No. 1798 de 2019. [↑](#footnote-ref-3)
4. Decreto 1082 de 2015. «Artículo 2.2.1.1.1.6.4. Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos:

   »1.    La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

   »2.    La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

   »3.    Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años». [↑](#footnote-ref-4)
5. Ley 43 de 1990: «Artículo 10. De la fe pública. La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en casos de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance. Parágrafo. Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las leyes». [↑](#footnote-ref-5)
6. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 861 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ley 2022 de 2020. «Artículo 1o. Modifíquese el artículo 4o de la Ley 1882 de 2018, el cual quedará así:

   »Artículo 4o. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2o de la Ley 1150 de 2007.

   »Parágrafo 7o. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

   »Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación pública.

   […]» [↑](#footnote-ref-7)